

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO: 571  
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2022-00118-00  
MEDIO DE CONTROL: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL  
CONVOCANTE: NIDIA CRISTINA CERINZA LEAL  
CONVOCADA: LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN  
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ASUNTO: Aprueba acuerdo conciliatorio

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintidós (2022).

**I. ASUNTO**

De conformidad con los artículos 24 de la Ley 640 de 2001 y 12 del Decreto 1716 de 2009, se procede a decidir de plano si se le imparte aprobación a la conciliación extrajudicial de la referencia.

**II. ANTECEDENTES**

A petición de la Dra. Nidia Cristina Cerinza Leal, quien actúa por conducto de apoderada especial, y previo agotamiento del trámite de rigor, la Procuradora Cincuenta y Uno Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá realizó audiencia de conciliación extrajudicial el 20 de abril de 2022, actuación en la cual la convocante formuló las siguientes pretensiones:

*“1) Reconocer y ordenar pagar a mi poderdante a partir de la fecha de su vinculación a la rama judicial en el cargo de Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado conforme los registros que obran en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la diferencia salarial que resulte de la bonificación por compensación teniendo en cuenta dentro de este porcentaje del ochenta por ciento (80%), la suma que resulte por la nivelación de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes, conforme a lo expresado.*

*2) Que La Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tenga en cuenta las sumas de dinero que resulten de las condenas anteriores para efectos de liquidar las prestaciones sociales de mi mandante y se realicen los aportes al sistema de seguridad social conforme el reconocimiento aquí solicitado.*

*3) Actualizar las sumas adeudadas a mi mandante de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE mes a mes tal y como lo ordena el CPACA”.*

Por su parte, la mandataria de la parte convocada presentó fórmula conciliatoria en los siguientes términos:

*“Que el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la sesión celebrada el cinco (05) de abril de dos mil veintidós (2022), según consta en el Acta 10, estudió y analizó la solicitud de conciliación presentada por NYDIA CRISTINA CERINZA, que se adelanta ante la Procuraduría General de la Nación, en agotamiento del requisito de procedibilidad. El Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación decidió, por unanimidad, que en el presente asunto debe proponerse fórmula conciliatoria, acogiendo la recomendación o concepto del abogado (a) de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal, según la cual: ‘En mi concepto, como abogada de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el presente asunto SE DEBE PROPONER ACUERDO*

CONCILIATORIO, en el caso de la convocante NIDIA CRISTINA CERINZA LEAL, frente a la incidencia de la prima especial regulada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 (incluyendo las cesantías de los congresistas), teniendo en cuenta la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado de 18 de mayo de 2016, dictada dentro del proceso No. 25000232500020100024602 y la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de septiembre de 2019, la aplicación de los criterios de prevención del daño antijurídico, la necesidad de prevenir los exagerados incrementos de las sumas pagadas por indexaciones e intereses, el imperativo constitucional y legal de proteger los recursos públicos y la conveniencia de evitar un mayor desgaste administrativo y judicial, razón por la cual se sugiere conciliar bajo los siguientes parámetros: 1) Se reconocerá y pagarán las diferencias salariales, teniendo en cuenta la incidencia de la prima especial percibida por los Magistrados de Altas Cortes, nivelada o re-liquidada teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los Congresistas, a partir del 9 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019 (respecto de los periodos reclamados con anterioridad al 9 de noviembre de 2018, ha operado la prescripción trienal, en razón a que la solicitud fue radicada el 9 de noviembre de 2021; y la fecha de corte es el 31 de marzo de 2019 por tratarse de la fecha en la que cesó su vinculación como Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado-Sala Contencioso Administrativa-Sección Tercera 007, antes de que en virtud de la Circular DEAJC19-68 comenzara el pago de la diferencia por nómina, el cual se produjo a partir de la nómina de agosto de 2019). 2) Se reconocerá y pagará lo correspondiente al valor del 70% de la indexación (en cumplimiento de las Políticas de Conciliación establecidas en el Manual Técnico de Defensa Judicial y Conciliación de la Rama Judicial, adoptado mediante Resolución No. 302 del 22 de febrero de 2022). Al realizar la liquidación correspondiente se efectuarán los descuentos de ley. Bajo los anteriores argumentos, se sugiere conciliar por los valores que se describirán adelante, con base en la siguiente liquidación.

PRETENSIONES Y PERIODOS A LIQUIDAR					
PRIMA DE SERVICIOS ART 15 DE LA LEY 4 DE 1992 - DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019					
PERIODO	REAJUSTE BONIFICACION (ART 15 LEY 4 DE 1992)	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR	VALOR INDEXACION	VALOR INDEXADO
2018	2,612,099	0	2,612,099	350,086	2,962,185
Noviembre 22-DIAS	1,105,119	0	1,105,119	150,260	1,255,379
Diciembre	1,506,980	0	1,506,980	199,826	1,706,806
2019	4,724,382	0	4,724,382	566,737	5,291,119
Enero	1,574,794	0	1,574,794	198,206	1,773,000
Febrero	1,574,794	0	1,574,794	188,073	1,762,867
Marzo	1,574,794	0	1,574,794	180,458	1,755,252
Total general	7,336,481	0	7,336,481	916,823	8,253,304

CONCILIACION	
CONCEPTOS	VALOR
CAPITAL ADEUDADO PRIMA ESPECIAL ART 15 DE LEY 4/1992 - AÑOS 2018 A 2019	7,336,481
TOTAL CAPITAL PRIMA ESPECIAL ART 15 LEY 4/1992 - DE 9/NOV/2018 HASTA EL 31/MAR/2019	7,336,481
INDEXACIÓN 70%	641,776
TOTAL DIFERENCIA CAPITAL E INDEXACIONES	7,978,257

OPCIONES PARA TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PROPONER FORMULA CONCILIATORIA					
CONCEPTO	VALOR CAPITAL	PORCENTAJE	VAL. INDEXACIÓN CONCILIADO	VAL. TOTAL DE LA CONCILIACION	AHORRO
TOTAL PRIMA ESPECIAL ARTICULO 15 DE LA LEY 4 DE 1992 CON 70% DE INDEXACION	7,336,481	70%	\$ 641,776	\$ 7,978,257	\$ 275,047

Así las cosas, el valor total del acuerdo conciliatorio corresponde a \$7.978.257, pagando el 70% de la indexación. De la anterior suma, se harán los descuentos de ley que sean a cargo del empleado. 3) El pago del presente acuerdo conciliatorio se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la radicación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Grupo de Pago de Sentencias, por parte del beneficiario, de la totalidad de los documentos necesarios para la reclamación del rubro conciliado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2469 de 2015 y la Circular DEAJC19- 64 de 12 de agosto de 2019. 4) Vencido el anterior término, si no se ha realizado el pago, se reconocerán intereses corrientes. 5) Ahora, se considera pertinente aclarar, que un acuerdo únicamente relativo por los periodos mencionados en el numeral 1, sería benéfico siempre y cuando la parte actora acepte conciliar totalmente, y el Magistrado competente profiera el aval o aprobación correspondiente, de

*manera que se ponga fin a la conciliación y no se interponga demanda por los mismos hechos, por acuerdo total (...)*”.

Frente a tal propuesta, la parte convocante se pronunció en los siguientes términos:

*“(...) una vez consultada la propuesta con la convocante, se acepta conciliar la fórmula conciliatoria propuesta por la parte convocada, en los términos indicados en la citada certificación (...)”.*

Finalmente, aceptada la propuesta, el acuerdo fue avalado por la procuradora judicial que atendió el caso, en los siguientes términos:

*“(...) en criterio de esta Agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las siguientes razones: A) Las diferencias salariales reconocidas a la convocante, relacionadas con la prima especial de servicios, según el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, son hechas por la entidad convocada teniendo en cuenta las disposiciones legales que regulan el tema y las sentencias unificación proferidas por el Consejo de Estado de 18 de mayo de 2016, dictada dentro del proceso No. 25000232500020100024602 y SUJ-016-CE-S2-2019, el 2 de septiembre de 2019. B) De otra parte es válido y aceptable para esta Agencia del Ministerio Público el acuerdo relacionado con el reconocimiento del 100% del capital y el 70% de la indexación de la suma reconocida (art. 65 A, Ley 23 de 1.991 y art. 73, Ley 446 de 1998) aclarando que la liquidación es responsabilidad de los funcionarios de la entidad convocada que la realizaron. Como quiera que la presente conciliación versa sobre los efectos económicos del acto administrativo citado en esta audiencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 93 del CPACA, el presente **acuerdo total** produce o conlleva la revocatoria total del mismo”.*

### III. CONSIDERACIONES

El Decreto 1716 de 2009, por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de 2001, en su artículo 2, prevé:

*“Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.*

*Parágrafo 1º. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado”.*

Como en este tipo de controversias está inmerso el patrimonio público, el acuerdo conciliatorio requiere el cumplimiento de unas exigencias especiales, que deben tenerse en cuenta por el juez en el momento de decidir sobre su aprobación, las cuales fueron compiladas por el Consejo de Estado, así:

- 1.- Que las partes estén debidamente representadas y que sus voceros tengan capacidad para conciliar.
- 2.- Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por los litigantes.
- 3.- Que la acción no haya caducado.
- 4.- Que existan pruebas necesarias para soportar la conciliación, es decir, que respalden lo reconocido patrimonialmente en el acuerdo.
- 5.- Que lo acordado no sea violatorio de la ley ni resulte lesivo para el patrimonio público.

Pues bien, afianzado en los presupuestos arriba enlistados, el despacho entrará a analizar si se cumplen o no. Veamos:

### **1. Representación de las partes litigantes y capacidad de sus representantes para conciliar**

La convocante, señora Nidia Cristina Cerinza Leal, es una persona con capacidad legal y está debidamente asistida por su abogada de confianza, a la cual le otorgó expresamente la facultad de conciliar (fl. 22 a 23 archivo digital “02TramiteProcuraduria.pdf”).

La convocada, La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es una persona de derecho público con capacidad legal, la cual actuó a través de apoderada, con la potestad de conciliar (fls. 49 a 54 archivo digital “02TramiteProcuraduria.pdf”).

### **2. El acuerdo versa sobre derechos económicos disponibles por las partes**

El acuerdo consiste en el pago de siete millones novecientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos moneda corriente (\$7'978.257 m/cte.), correspondientes al reajuste de la bonificación por compensación con la incidencia de la prima especial devengada por los magistrados de las altas cortes, a su vez nivelada con el auxilio de cesantía percibido por los congresistas, durante el periodo comprendido entre el 9 de noviembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

La Ley 4ª de 1992, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”, en lo atinente a la prima especial de servicios, consagró:

*“ARTÍCULO 15.- Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los ministros de despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública” (subrayado fuere del texto).*

A su turno, el Presidente de la República, en desarrollo de las normas generales contenidas en la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 10 de 1993, “Por el cual se regula la prima especial de servicios”, en cuyo artículo 1º señaló que dicha prestación “será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella”, y en el artículo 2 precisó que “se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de navidad”.

Luego, se expidió el Decreto 610 de 1998, “Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”, que preceptuó:

*“ARTÍCULO 1º. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2º del presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.*

*La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes” (subrayado fuera del texto).*

Respecto a los destinatarios de la bonificación por compensación, el artículo 2 de la referida disposición legal, refirió:

*“ARTÍCULO 2º. La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito”.*

Y, en cuanto a su remuneración, según los considerandos de tal decreto, se consignó:

*“Que para el año fiscal de 1998, la remuneración de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; de los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; de los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; de los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; de los Fiscales del Tribunal Superior Militar, de los fiscales ante Tribunal de Distrito, y de los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, equivale al 46% de la remuneración de los magistrados de las Altas Cortes;*

*Que el Gobierno Nacional acordó con los representantes de los funcionarios mencionados en el considerando anterior, un esquema que gradualmente permita superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados, así:*

*Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por primera vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste a los ingresos laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado;*

*Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado;*

*A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”.*

La anterior normatividad fue adicionada por el Decreto 1239 de 1998, en los siguientes términos:

*“Artículo 1º. La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998, se aplicará también en los términos previstos por el artículo primero de ese decreto, a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.*

Posteriormente, mediante Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de 1998 y 1239 de 1998, disposición que fue anulada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2001<sup>1</sup>, por lo que recobraron vigencia.

El Decreto 664 de 1999, “*Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios*”, creó dicha prestación con carácter permanente para: i) los Magistrados de Tribunal Nacional de Orden Público, ii) Fiscales Delegados ante Tribunal Nacional, iii) Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional, iv) Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, v) Magistrados Auxiliares, vi) Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, vii) Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, viii) Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado-Sección Segunda, sentencia del 25 de septiembre de 2001. Conjuez ponente: Álvaro Lecompte Luna, expediente 395-99.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del 11 de diciembre de 2003, expuso<sup>2</sup>:

*“Se anota que el **derecho reconocido como bonificación por compensación** ha venido siendo cancelado desde el 1 de septiembre de 1999, pues se creó por medio del Decreto 664 de 1999, el cual no ha sido anulado o suspendido.*

*Sobre este punto cabe señalar que no se puede afirmar que el Decreto 664 de 1999 haya creado una bonificación por compensación diferente de la prevista en los Decretos 610 y 1239. Es el mismo derecho con diferente cuantía. Pero el 664 perdió fuerza ejecutoria cuando se declaró nulo el 2668, como consecuencia de que el 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren el 610 y 1239 no existía y por ello utilizó la expresión obvia de “créase”; entonces si el día anterior a la expedición del 664 la bonificación por compensación no existía, ello es el fundamento fáctico jurídico de su expedición, pero al declararse nulo el 2668 y recobrar vigencia el 610 y 1239, ello determina que el día anterior estaban vigentes éstos y, por ende, desapareció el fundamento fáctico y jurídico del tantas veces citado 664, que es lo que conforme al artículo 66, numeral 2, del C.C.A., se denomina “pérdida de fuerza ejecutoria”, fenómeno que se traduce en que por mandato legal un acto administrativo no está llamado a seguir produciendo efectos, sin necesidad de declaración judicial que así lo disponga” (subrayado fuera del texto).*

A su turno, el Presidente de la República, mediante el Decreto 4040 de 2004 “*Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios*”, señaló que dicha prestación es incompatible para todos los efectos con la bonificación por compensación. Al respecto, los artículos 1 y 2, prescribieron:

*“**Artículo 1º.** A partir de la vigencia del presente Decreto, créase una Bonificación de Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional, que a partir de la misma fecha se vinculen al servicio en los empleos que se señalan a continuación:*

*\*Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional.*

*\*Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar.*

*\*Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes.*

*\*Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia.*

*\*Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial.*

*\*Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.*

*Igualmente, tendrán derecho a esta Bonificación de Gestión Judicial quienes ingresen, con posterioridad a la publicación de este Decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo (...)*

***Parágrafo 1º.** Los funcionarios descritos en el presente artículo, tendrán derecho a percibir única y exclusivamente la Bonificación de Gestión Judicial en los términos del presente artículo, la cual es incompatible para todos los efectos con la Bonificación por Compensación. (...)*” (subrayado fuera del texto).

*“**Artículo 2º.** Podrán optar al reconocimiento y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, a que se refiere el artículo anterior, los servidores de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y del Ministerio de Defensa Nacional, que con anterioridad a la publicación del presente Decreto se encontraban desempeñando los empleos de Magistrados de Tribunal Nacional de Orden Público, Fiscales Delegados ante Tribunal Nacional, Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de*

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de diciembre de 2003, Conjuez ponente: Evelio Suárez Suárez, expediente 25000-23-25-000-1999-3971-01(2024-01).

*Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los servidores de la Procuraduría General de la Nación que actúan de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal (...)*".

La anterior disposición legal fue declarada nula por la Sala de Conjuces del Consejo de Estado, al sostener:

**"INAPLICABILIDAD DEL DECRETO 4040 DE 2004 POR SER REGRESIVO RESPECTO DEL DECRETO 610 DE 1998 - VIOLACIÓN DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.**

*El Decreto 610 de 1998 consagra un derecho laboral denominado bonificación por compensación **con carácter permanente**, a favor de los Magistrados de Tribunales, de Consejos Seccionales de la Judicatura y magistrados Auxiliares de Altas Cortes, entre otros, el cual, sumado a la prima especial de servicio y demás ingresos laborales iguales, **para la vigencia de 2001 en adelante, corresponderá como salario** al 80% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, y que se pagará mensualmente.*

*Esta bonificación ratificó el monto salarial mínimo de esa categoría de servidores públicos, que ya había sido fijada por las leyes 10 de 1987 y 63 de 1988, que establecieron la prohibición de que, en ningún caso, la remuneración mínima mensual de los cargos de Magistrados Auxiliares, Abogados Asistentes de las Altas Cortes y de los Magistrados de Tribunales, no sería inferior al 80% de la remuneración total que devenguen los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.*

*Así las cosas, todos los Magistrados de Tribunales y Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes del país, en virtud del Decreto 610 de 1998, adquirieron a partir de 2001, el derecho laboral irrenunciable a tener una remuneración mensual equivalente al 80% de lo devengado por un Magistrado de Alta Corte.*

*Como es sabido, muchos Magistrados demandaron a la Rama Judicial para que se les reconociera el pago de sus salarios en el mencionado porcentaje, obteniendo fallos favorables, cosa que llevó al Gobierno Nacional, a adoptar un mecanismo que frenara tantas condenas, y fue así como el día 3 de diciembre de 2004, expidió el Decreto 4040, creando una bonificación por gestión judicial, también con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguales, a partir de la vigencia fiscal de 2001, el 70% que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, la cual se pagaría mensualmente.*

*Así entonces, los destinatarios del Decreto 4040 de 2004, son los mismos del Decreto 610 de 1998, que para obtener inmediatamente el pago del 70% indicado, debían desistir de las pretensiones de las demandas que habían instaurado en procura de obtener el pago del 80% de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes, o celebrar contratos de transacción con propósitos idénticos, lo cual debían realizar hasta el 31 de diciembre de 2004, con lo cual, se les compelió a que accedieran a recibir el 70%, pues, estaban recibiendo solo el 60%, de ahí la causa de tantas demandas.*

*En tales condiciones, para una misma categoría de servidores que están en un mismo plano de igualdad, en cuanto en virtud de la soberanía tienen la facultad de administrar justicia, ejecutando la misma labor, teniendo el mismo horario, idénticas funciones y responsabilidades, deben cumplir los mismos requisitos y calidades generales y específicas para desempeñar el cargo, dos normas aún vigentes, el Decreto 610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004, establecieron a su vez dos regímenes laborales referentes al monto de la asignación mensual, que se diferencian en que en el primero, el salario es del 80% y en el segundo es el 70% de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes.*

*De tal manera, la norma posterior, el Decreto 4040 de 2004, creó una desigualdad manifiesta entre iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.*

*Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social, político, económico o intelectual de un trabajador público o privado, está prohibido constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles.*

*La jurisprudencia constitucional, contenciosa y laboral, han sido uniformes en definir que los*



derechos laborales ciertos e indiscutidos por las partes y más aún cuando están establecidos y reconocidos en la Constitución y en las leyes, no pueden ser materia u objeto de transacción o conciliación. Que cualquier negocio celebrado en contra de esa prohibición resulta de pleno derecho ineficaz, razón por la cual, por contener el Decreto 4040 de 2004, un régimen salarial regresivo para los Magistrados de Tribunales y sus otros destinatarios, respecto de los que ya habían adquirido mediante Decreto 610 de 1998, corresponderá a esta Sala, garantizarle a los accionantes sus derechos adquiridos, máxime si conforme al artículo 2º de la Constitución Política, debió el Gobierno actuar según los fines esenciales del Estado, de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, cosa que no se vislumbra con el mencionado decreto, pues, además, contravino los altísimos deberes de respeto a la normatividad internacional, creando condiciones que le impiden a quienes a él se acogieron, de gozar de sus derechos laborales en las mismas condiciones que lo disfrutaban sus iguales, por lo que deberá inaplicarse dicha norma por inconstitucional, acogiendo el mandato del artículo 4º de la Constitución, y atendiendo que la jurisdicción que deviene de la soberanía le impone a este Tribunal el noble deber de administrar justicia y no arbitrariedad, lo cual implica atender sin restricción alguna que ‘Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’.

### **LOS DESTINATARIOS DEL DECRETO 610 DE 1998, MANTIENEN INCÓLUMES LOS DERECHOS ALLÍ CONSAGRADOS.**

Tal como se ha indicado, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas de la Ley Marco de Salarios - Ley 4ª de 1.992-, expidió los Decretos números 610 y 1239 de 1.998, en los que se estableció expresamente que el salario o retribución de los magistrados de tribunales sería el equivalente al ochenta por ciento (80%) del salario que por todo concepto perciben los magistrados de la Alta Corte. Esta norma previó que los efectos fiscales iban a partir de la fecha de su publicación, es decir, desde el día 30 de marzo de 1.998 (...).

Así entonces, los destinatarios del Decreto 610 de 1998, caso del actor, ganaron el derecho a la bonificación allí establecida desde que ingresaron al servicio de la Rama Judicial en sus condiciones de Magistrados, no pudiéndose mediante otra norma o acto jurídico afectárseles tal derecho, por estar cobijados por el principio mínimo fundamental de derecho del trabajo, de la irrenunciabilidad de los derechos laborales por sus titulares, y por ello, no podrá un tercero, - el Estado o los particulares - suprimirlos, pues, su carácter de derecho humano fundamental así lo impone, quedando amparados por la regla pro operario ‘De la Condición Más Beneficiosa’, consagrada en el artículo 53 inc. 5º de la Constitución Política (...).

Todo esto impone necesariamente concluir a la luz del Estado social de derecho, que los destinatarios del Decreto 610 de 1998, caso del accionante, en su calidad de Magistrados Auxiliar de Alta Corte, adquirió un derecho en sí mismo, y por ello no podía el Gobierno suprimírsele mediante la aplicación del regresivo Decreto 4040 de 2004, y mucho menos a través de una transacción sobre derechos ciertos e indiscutibles, que constituye además un desconocimiento a lo preceptuado en el capítulo III Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como ya se indicó (...).

Para la Sala, la bonificación por compensación es salario, por lo tanto, no puede ser válida una transacción sobre ella, pues, está prohibida por la Constitución, y por ello, con la susodicha transacción, se desatendió que conforme al texto del Decreto 610 de 1998, a partir del primero (1º) de enero de 2001, la remuneración para los demandante en su condición de Magistrados, era el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la totalidad de lo percibido como salario por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes, no pudiendo ser objeto de ese negocio, porque se trataba de un verdadero derecho adquirido.

Se reitera, que como la bonificación por compensación es salario, por ello, el Decreto 4040 de 2004, y la transacción que devino por éste, desconocieron normas supraleales como los Convenios 95 y 100 de la OIT, sobre la protección del salario, 1949, y sobre igualdad de remuneración, 1951, respectivamente (...).

En síntesis, para la Sala es incuestionable que el acto acusado viola los principios tutelares consagrados en la Carta Política como derechos fundamentales del trabajo, razón por la cual se impone decretar su anulación” (subrayado fuera del texto).



La aludida colegiatura, mediante sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016<sup>3</sup>, ratificó la posición adoptada, en el sentido de que la bonificación por compensación, contenida en los referidos Decretos 610 y 1239 de 1998, se considera un verdadero derecho adquirido, irrenunciable, el cual fue creado con el fin de nivelar gradualmente la asignación de algunos funcionarios de la Rama Judicial, al indicar:

*“No puede desvirtuarse el sentido literal del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 acudiendo a una interpretación según la cual el artículo 16 ejusdem fijó, de manera implícita, que los beneficiarios de la prima especial de servicios habían de percibir una remuneración distinta a la recibida por los Parlamentarios. Lo único que esta norma pretende al establecer que: ‘La remuneración, las prestaciones sociales y los demás derechos laborales de los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y los Fiscales del Consejo de Estado serán idénticos’ es que se respete el derecho a la igualdad salarial de funcionarios que ocupan cargos semejantes.*

*Teniendo en cuenta que la ley determina como finalidad de la prima especial de servicios la equiparación de los ingresos percibidos por los Magistrados de las Altas Cortes a aquellos que devengan los miembros del Congreso de la República, mal podría señalarse que un decreto que cumple la función de reglamentar dicha Ley podía establecer cosa distinta. De hecho, el Decreto 10 de 1993 no lo hizo. Todo lo contrario, tal cuerpo normativo desarrolló de manera precisa los términos en los que debía darse la equiparación en el ingreso de los más altos funcionarios de varias ramas del poder público al señalar que había de efectuarse sobre la totalidad de los ingresos laborales anuales recibidos por unos y otros.*

*Es claro, entonces, que en ninguna de las normas que contienen el régimen de la prima especial de servicios se hizo la distinción entre salario y prestaciones sociales. Se habló, en cambio, de ingresos **laborales** totales.*

*Este criterio fue sostenido por la Sala de Conjuces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado en la providencia proferida el día 4 de mayo de 2009, dentro del proceso identificado con la radicación No. 250002325000200405209 02, con ponencia del Dr. Luis Fernando Velandia Rodríguez.*

*(...) Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del empleado.*

*De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.*

*Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “... de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente.*

*En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.*

*Habiendo señalado que el auxilio de cesantía es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución*

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjuces, sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016, expediente 250002325000201000246-02.

Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos.

Teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso laboral que perciben los Magistrados de las Altas Cortes, sino que además ‘... constituirá factor de salario solo para la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de acuerdo con las normas nacionales vigentes que regulan el régimen prestacional de los funcionarios señalados’, y que el Decreto 610 de 1998 garantiza que sus beneficiarios perciban un porcentaje del total de ingresos laborales devengados por estos funcionarios, también se debe concluir que es necesario que el monto percibido por los Magistrados de las Altas Cortes por este concepto, y que haya sido liquidado teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los Congresistas, debe ser un factor para determinar el valor de la bonificación por compensación a la que tiene derecho el actor” (subrayado fuera del texto).

De la normatividad y jurisprudencia transcritas, es válido concluir que **la prima especial de servicios y el auxilio de cesantía**, por constituir factores de salario, **tienen incidencia en la liquidación de la bonificación por compensación** que perciben los funcionarios públicos a los que hacen alusión los Decretos 610 de 1998 y 1239 de 1998.

En punto al fenómeno prescriptivo, la referida sentencia indicó:

*“Respecto al análisis de la prescripción trienal, es menester hacer alusión al artículo 41 del Decreto 3135 de 19681 y 102 del Decreto 1848 de 19692 que disponen: ‘Las acciones estipuladas en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible’.*

*Contempla el mismo artículo que el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.*

*Retomando las normas citadas en el párrafo anterior en relación con la prescripción de los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de exigibilidad, para que, a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su prescripción. Es decir, el prerequisite de la aplicación de la prescripción del derecho, es que éste se encuentre en el estado jurídico de la exigibilidad.*

*El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.*

*En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012 (...)* (subrayado fuera del texto).

No queda duda, entonces que el término de la prescripción es de tres (3) años, contado desde la fecha de **exigibilidad del derecho**, el cual se interrumpe con la reclamación administrativa, pero por un lapso igual, esto es, tres (3) años contados a partir de la solicitud.

### **3. Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho**

El artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA prevé que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho puede ser promovido en cualquier tiempo cuando se dirige

contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, lo cual acontece en este caso, si se tiene en cuenta que la bonificación por compensación ostenta esa connotación jurídica, pues sus destinatarios la percibirán permanentemente mientras el vínculo laboral este vigente.

Según la certificación expedida por el Secretario General del Consejo de Estado, la señora Nidia Cristina Cerinza Leal prestó sus servicios en varios periodos como Magistrada Auxiliar en la referida corporación y, por ende, la bonificación por compensación mutó en prestación unitaria, de modo que debe analizarse si caducó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que procedía contra el acto administrativo que negó el reajuste de ese emolumento con la incidencia de la prima especial de servicios y el auxilio de cesantía durante el lapso comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de marzo de 2019 (fls. 43 a 44 archivo digital *"02.TramiteProcuraduria.pdf"*), pues hasta esta última fecha versó el acuerdo conciliatorio, toda vez que, a partir del 1 de agosto del referido año se empezó a reconocer y pagar por nómina a los servidores activos beneficiarios (fl. 26 archivo digital *"02.TramiteProcuraduria.pdf"*).

Así las cosas, no se configura dicho fenómeno extintivo, si se observa que la reclamación administrativa formulada por la convocante fue radicada el 9 de noviembre de 2021 (fls. 31 a 42 archivo digital *"02.TramiteProcuraduria.pdf"*) y la entidad convocada la resolvió en forma desfavorable mediante Resolución No. RH-0017 del 5 de enero de 2022 (fls. 24 a 28 archivo digital *"02.TramiteProcuraduria.pdf"*), de manera que si se cuentan los cuatro (4) meses a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo, esto es, 7 de enero de 2022 (fl. 29 archivo digital *"02.TramiteProcuraduria.pdf"*), dicho lapso vencía el 8 de mayo del año en curso, y como la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 2 de marzo de 2022 (fl. 48 archivo digital *"02.TramiteProcuraduria.pdf"*), es innegable que se presentó oportunamente.

#### **4. El acuerdo conciliatorio debe estar soportado en las pruebas necesarias que respalden la obligación dineraria reconocida**

Para este efecto, se acopiaron las siguientes probanzas:

a) Petición de la Dra. Nidia Cristina Cerinza Leal a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial radicada el 9 de noviembre de 2021, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de la suma de dinero correspondiente a las diferencias generadas en la bonificación por compensación con la nivelación de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes (fls. 31 a 41 archivo digital *"02TramiteProcuraduria.pdf"*).

b) Resolución No. RH-0017 del 5 de enero de 2022, por medio de la cual el Director de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le negó a la convocante el reconocimiento y pago de la nivelación salarial de la bonificación por compensación (fls. 24 a 28 archivo digital *"02TramiteProcuraduria.pdf"*).

c) Certificación expedida el 3 de noviembre de 2021 por el Secretario General del Consejo de Estado, en la cual se hace constar que la señora Nidia Cristina Cerinza Leal, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.589.524 expedida en Bogotá, presta sus servicios en esa entidad (fls. 43 a 44 archivo digital *"02TramiteProcuraduria.pdf"*).

d) Certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, calendada el 6 de abril de 2022, en la cual esa entidad definió los parámetros bajo los cuales se autorizó proponer fórmula de arreglo en la audiencia de conciliación extrajudicial con respecto al reajuste y pago de la bonificación por compensación con la incidencia de la prima especial de servicios regulada en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, incluyendo el auxilio de cesantía de los Congresistas, en favor de la señora Nidia Cristina Cerinza Leal, documento que contiene la respectiva liquidación desde el 9 de noviembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019, la cual arroja un valor a pagar de \$7'978.257, aplicando la prescripción trienal. (fl. 32 archivo digital *"02TramiteProcuraduria.pdf"*).

Apreciado el caudal probatorio en forma conjunta y de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 176 CGP), se concluye que reúne los requisitos de pertinencia, conducencia y eficacia, y como quiera que la Dra. Nidia Cristina Cerinza Leal ostenta vocación jurídica para acceder a la re-liquidación prestacional pretendida, toda vez que percibió la bonificación por compensación y, por tanto, es forzosa su liquidación con la inclusión de la prima especial de servicios y el auxilio de cesantía, debido a que constituyen factores de salario, tal como lo acogió el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es innegable entonces que la fórmula conciliada bajo examen contiene una obligación clara, expresa y exigible, por lo que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.

#### **5.- El acuerdo no debe ser violatorio de la ley ni lesivo para el patrimonio público**

Si bien la conciliación propugna por la descongestión de la jurisdicción y la composición amigable del conflicto a través de una solución directa convenida por las partes, también es cierto que todo acuerdo de ese linaje debe ser verificado y refrendado por el juez, quien para aprobarlo debe establecer que ese arreglo económico se ajuste a la ley y no menoscabe el erario.

Como se indicó en líneas atrás, la prima especial de servicios y el auxilio de cesantía, por constituir factores de salario, tienen incidencia en la liquidación de la bonificación por compensación que perciben los funcionarios públicos a los que hacen alusión los Decretos 610 de 1998 y 1239 de 1998, de manera que el acuerdo conciliatorio que se examina no está viciado de ilegalidad y, por el contrario, goza de respaldo jurídico y jurisprudencial.

Tampoco se evidencia que sea lesivo para el patrimonio público, si se advierte que en la pre-liquidación se dio aplicación a la prescripción trienal, y se convino un plazo de cuatro (4) meses para su pago, contado desde que la entidad cuente con toda la documentación requerida para adelantar el trámite de rigor, unido a que se pagará el 70% de la indexación y los intereses se causaran vencido dicho término, lo cual no es óbice para homologarlo, dado que tales conceptos no hacen parte de las garantías laborales mínimas y, por tanto, son disponibles por su titular, circunstancias todas que permiten colegir que el arreglo es favorable para las partes contendientes, pues al paso que la convocada evitaría una eventual condena judicial por la pretendida re-liquidación prestacional, más la indexación, los intereses moratorios y las costas procesales, sumado al costo de tiempo que implica su trámite, la convocante se beneficiaría también porque se ahorraría los gastos del proceso y no se expondría a que su eventual demanda no saliere avante.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la conciliación examinada se adelantó dentro de los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 640 de 2001; que no se observa causal de nulidad que afecte lo actuado o invalide lo acordado; y que el pacto logrado no acusa visos de ilegalidad ni lesiona los intereses económicos de la entidad pública convocada, a la luz de lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1716 de 2009 se le impartirá aprobación mediante proveído que tendrá efectos de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.

### **IV. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá

#### **RESUELVE**

**PRIMERO:** APROBAR la conciliación extrajudicial celebrada entre la convocante, Dra. Nidia Cristina Cerinza Leal, y la convocada, La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 20 de abril de 2022, ante la Procuraduría Cincuenta y Uno Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá.

**SEGUNDO:** CONMINAR a las partes intervinientes a hacer efectivo el arreglo conciliatorio logrado en los términos y plazo estipulados, una vez ejecutoriada esta providencia.

**TERCERO:** DECLARAR que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1716 de 2009, estas diligencias hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo.

**CUARTO:** EXPEDIR a la parte convocante copia auténtica del acuerdo conciliatorio y del presente auto, de conformidad con el artículo 114 del Código General del Proceso y en concordancia con el precepto 14 de la Ley 640 de 2001.

**QUINTO:** ENVIAR copia de este proveído a la Procuradora Ochenta y Cinco Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá.

**SEXTO:** ARCHIVAR las presentes diligencias, una vez cumplido lo anterior y previo registro en el sistema de información Justicia Siglo XXI.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ**

Juez

CHR

Firmado Por:

Humberto Lopez Narvaez

Juez

Juzgado Administrativo

027

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 94803b55cc5fd0a324adb11542ec518dcd3117ce333b47bac606d2f0e613de7c

Documento generado en 05/07/2022 11:05:46 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>